

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud.

ARTÍCULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 385.

El Ilmo. Sr. Director general de Seguridad y Orden público me dice en 23 de junio último lo siguiente.

En virtud de Reales órdenes expedidas por el Ministerio de la Guerra han sido declarados baja definitiva en el ejército D. Alejandro Berbiela e Irigoyen, Comandante graduado Capitan del regimiento infantería de Bailen, D. Antonio Gil Taboada, Capitan del regimiento infantería de Sevilla, y D. Cristóbal Salazar Chirino, Teniente del batallón provincial de Mallorca; y se ha concedido el relief sin abono de sueldos á D. José Nollivos y Arriaga, Capitan graduado Teniente que fué del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas.

Lo comunico á V. S., á fin de que poniéndolo en conocimiento de las Autoridades locales de esa provincia, no puedan aparecer los tres primeros en punto alguno de ella con un caracter militar que han perdido con arreglo á la Ordenanza y disposiciones vigentes.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de los Alcaldes y efectos que se expresan. Orense julio 19 de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación con fecha 29 de junio último me dirige la Real orden siguiente.

Por Real orden circular, comunicada en 9 de julio de 1847 á los Gefes políticos de las provincias, se

dictaron entre otras las disposiciones siguientes:

1.ª En toda eleccion inmediata á la renovacion total de un Ayuntamiento, quedará sin renovar un número de Concejales de los existentes igual á la mitad de los que debe haber en el año siguiente á la eleccion, con arreglo al vecindario del distrito municipal, y se elegirá otro número de Concejales igual al que quede sin renovar.

2.ª En el sorteo de que habla el artículo 60 de la ley de Ayuntamientos, entrarán todos los Concejales existentes, incluso los Alcaldes y los Tenientes de Alcalde.

3.ª Para los efectos de toda renovacion bienal se entenderá que todos los Ayuntamientos se instalaron el día 1.º de enero del año anterior á la eleccion, y que en el mismo día tomaron posesion todos los Concejales existentes, sea la que quiera la fecha de la instalacion y de la toma de posesion.

Lo que de la propia Real orden comunico á V. S. á fin de que dichas disposiciones se tengan presentes en la próxima renovacion de las Corporaciones municipales.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público, y para que por parte de los Ayuntamientos se cumpla con toda exactitud lo que por la misma se ordena. Orense julio 20 de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

CIRCULAR NÚM. 386.

Habiéndose fugado del presidio de la carretera de Vigo, el confinado en el mismo Juan Fernandez de Castro cuya media filiacion á continuacion se inserta, encargo á los señores Alcaldes de esta provincia, Guardia civil y empleados de vigilancia procuren su captura, remitiéndolo con seguridad á disposicion de este Gobierno. Orense julio 19 de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

MAYORIA DEL PRESIDIO DE LA CARRETERA DE VIGO.

Media filiacion del confinado Juan Fernandez de Castro (cuyas señas á continua-

cion se expresan), hijo de Luis y de Maria Fernandez, natural de Olga de Navia, partido de Luarca, provincia de Oviedo, vecindado en su pueblo, de estado viudo y de oficio chocolatero.

Señas generales.

Estatura 5 pies, edad 29 años, pelo negro, ojos pardos, nariz regular, barba naciente, cara redonda, color blanco.

Nota. El día de la fecha desertó de los tajes de este punto sin circunstancias agravantes llevándose las prendas de vestuario. Mombuey 26 de junio de 1858.—García Florez.

Número 387.

En la Gaceta de Madrid número 195 del miércoles 14 de julio se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE FOMENTO.

Ilmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de la urgente necesidad de proceder al establecimiento de portazgos en la parte de la carretera de Madrid á Vigo, comprendida en las provincias de Orense y Pontevedra, como medio eficaz de alejar de la circulacion el uso de carruajes de llantas estrechas y clavos de resalto, y los de ruidas dentadas que tanto daño causan en la via, aumentando considerablemente los gastos de conservacion, y careciendo al propio tiempo el Estado de los productos que legitimamente le corresponden, ha tenido á bien S. M. disponer que se sitúen seis portazgos: los dos primeros en la provincia de Pontevedra, y los cuatro restantes en la de Orense, en esta forma: el primero en el puenté del Sello, con arancel de cinco leguas; el segundo en Puenteareas, con igual arancel; el tercero en la cuesta de San Marcos, con arancel de cuatro leguas; el cuarto en Villa de Rey, con arancel de cinco leguas; el quinto en el puente del Navallo, con arancel de ocho leguas; y el sexto en Villavieja, con arancel de cinco leguas. Pero siendo preciso aguardar para el planteamiento de las respectivas administraciones á que se construyan los cinco edificios necesarios y modificacion de la caseta, propiedad del Estado, que puede utilizarse para el del puente Navallo, se ha servido mandar S. M. que al efecto se dicten por V. I. las medidas mas eficaces, autorizándole ademas para que, segun los medios de que pueda disponer, procure la apertura provisional de los referidos establecimientos.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de junio de 1858.—Guendulain.—Señor Director general de Obras públicas.

Ilmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de la urgente necesidad de proceder al establecimiento de portazgos en la carretera de Orense á Pontevedra como medio eficaz de alejar de la circulacion los carruajes que por sus malas condiciones destruyen poderosamente la via, aumentando con exceso los gastos de conservacion, y con el fin de que el Estado no carezca de los productos que legitimamente le corresponden, se ha servido S. M. disponer que se sitúen tres portazgos, uno en Carballino, provincia de Orense, con arancel de seis leguas, y los otros dos en Soutelo de Montes y en San Mauro, provincia de Pontevedra, ambos con arancel de cinco leguas. Pero siendo preciso aguardar para el planteamiento de las respectivas Administraciones á que se construyan los edificios necesarios, se ha servido mandar S. M. que al efecto se dicten por V. I. las medidas mas eficaces, y autorizándole ademas para que, segun los medios de que puede disponer, procure la apertura provisional de los referidos establecimientos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de junio de 1858.—Guendulain.—Señor Director general de Obras públicas.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 21 de julio de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitián.

Número 388.

En la Gaceta de Madrid número 198 del sábado 17 de julio se lee lo siguiente:

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo expuesto por esa Direccion general sobre la conveniencia de que se le releve del cargo de nombrar los estanqueros que le fué conferido por Real orden de 6 de agosto del año próximo pasado, á fin de poder dedicar el tiempo y la atencion que le quitan los asuntos de esta clase á los mas importantes de promover los adelantos de la Administracion de las Rentas y el fomento de sus valores; de

conformidad con lo propuesto por V. I. se ha servido resolver S. M. que los Gobernadores de provincia vuelvan a tener a su cargo el nombramiento de los estancos, y que aquellos recaigan a virtud de propuesta de las Administraciones principales de Rentas estancadas, sujetándose además a las reglas siguientes:

1.ª No podrá concederse el desempeño de los estancos sino a individuos que tengan medios para pagar al contado los efectos que saquen para la venta.

2.ª Sobre la base del referido pago se preferirá en los nombramientos:

Primero. A los cesantes jubilados y retirados que disfruten mayores haberes pasivos, los cuales serán asimismo preferidos para los estancos de mayor importancia.

Segundo. A los inutilizados en acto del servicio, ya lo hubiesen sido en el ejército o en otras carreras.

Tercero. A los que hayan prestado servicios en el ejército o en otras carreras aun cuando no devenguen haberes pasivos.

Cuarto. A las madres, viudas o hijas de los individuos del ejército de mar y tierra, de la Guardia civil y de los resguardos, muerto en actos del servicio.

Quinto. A las viudas de los estancos.

Y sexto. A las viudas o hijas de militares y empleados que disfruten viudedad o pensión.

3.ª Todas las vacantes de estancos que ocurran se anunciarán en el *Diario*, si lo hubiere de la capital de la provincia y en el *Boletín oficial*. En el anuncio se advertirá que durante ocho días, contados desde la fecha de su publicación, se admitirán por las respectivas Administraciones principales de Rentas estancadas las solicitudes de los que pretendan desempeñar los estancos.

4.ª Las Administraciones examinarán las solicitudes y los documentos que se acompañen a las mismas para justificar los servicios de los interesados, y después de asegurarse de quienes sean los que tengan medios para pagar al contado los efectos, dirigirán la correspondiente propuesta en terna al Gobernador de la provincia, con designación de los puntos mas convenientes donde deban situarse los estancos. A las propuestas se acompañarán los documentos originales por los que se acrediten los servicios de los comprendidos en ellas, o copias autorizadas de los mismos documentos que aquellos han de facilitar, y una relación nominal de todos los que hubieren presentado solicitudes, con un ligero extracto de sus servicios y nota de si cada uno de ellos tiene o no recursos para el pago previo de los efectos.

5.ª Los expedientes relativos al establecimiento de nuevos estancos se seguirán instruyendo con arreglo a lo prevenido en la Real orden de 12 de diciembre de 1838, y las Administraciones principales de Rentas estancadas los remitirán, por conducto de los Gobernadores a esa Dirección general.

6.ª No se hará abono de salarios a los estancos que se establezcan sin la aprobación de ese centro directivo, y los Jefes que autoricen el pago, contraviniendo aquella prevención, reintegrarán a la Hacienda las cantidades que se satisfagan.

7.ª Y finalmente, que esa Dirección general vigile sobre el exacto cumplimiento de todas estas disposiciones, y quede con atribución de poder revocar cualquier nombramiento que se hubiere hecho de conformidad con las reglas que se dejan establecidas.

De la Real orden lo digo a V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 9 de julio de 1858. — Soler y Rúa. — Sr. Director general de Rentas estancadas.

Lo que se inserta en el *Boletín oficial* para conocimiento del público. Orense 21 de julio de 1858. — El Gobernador, Herminio Gilman.

En la Gaceta número 119 del jueves 8 de julio se lee lo siguiente:

SECRETARIA GENERAL
DEL CONSEJO REAL.

Real decreto.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas: a todos los que las presentes vieren y entendieren, y a quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que ante mi Consejo Real pende en primera y única instancia, entre partes, de la una D. Melchor Bruguera, D. Juan Almirall y Lucia, Don Magin Tusquet y consortes, accionistas en minoría de la Sociedad anónima *Fundición Barcelonesa de Bronces y otros metales*, representados por el Licenciado D. Manuel Sas y Llera, y en el acto de la vista por el Licenciado D. Juan Francisco Domenech, demandantes; y de la otra mi Fiscal, en representación y defensa de la Administración general del Estado, demandada, y coadyuvada por el Licenciado D. Juan Barrie y Agüero, a nombre de D. Rafael Degollada, D. Jaime Clot, D. José Angelet, D. Tomás Fabregas, D. José Ramos Font y consortes, accionistas en mayoría de la expresada Sociedad, sobre validez o insubsistencia de las Reales ordenes de 9 de julio de 1857 y 21 de mayo de 1856, así como los acuerdos tomados en juntas generales de 8 de enero y 4 de julio de 1856: Vistos los antecedentes y documentos unidos a las actuaciones, de los cuales resulta lo siguiente:

Que por Real decreto de 4 de setiembre de 1850 se declaró legalmente constituida la Sociedad *Barcelonesa de fundición de bronce y otros metales*, bajo las condiciones consignadas en los estatutos, entre las cuales son de notar las siguientes:

Artículo 1.º Se crea una Sociedad anónima fabril y mercantil por acciones.

5.º El capital social será de 5.000.000 de reales, representado por 1.500 acciones de 100 pesos (2.000 rs. cada una), cuyo capital podrá ser aumentado a voluntad de los accionistas, y previos los trámites correspondientes.

12.º El aumento de capital por emisión de acciones deberá ser objeto de acuerdo en junta general, que represente por lo menos dos terceras partes del capital impuesto, y una votación en mayoría de las dos terceras partes por lo menos del referido capital.

15.º La sociedad se rige por la junta general de accionistas, por una de gobierno y por una Dirección.

16.º La junta general ordinaria se reunirá una vez al año en el mes de enero, y con carácter de extraordinaria cuando lo estime la de gobierno.

20.º Tendrán derecho de asistir a las juntas generales solo los accionistas que lo sean por cinco acciones, posadas con anticipación de tres meses a la celebración de la junta.

21.º Las juntas generales se anunciarán con veinte días de anticipación en los periódicos de Barcelona.

Que a instancia de los accionistas, arreglada a los artículos 5.º y 12.º preinsertos, y previos los trámites establecidos, autorizó por mi Real decreto de 2 de febrero de 1855 el aumento de cuatro millones sobre los 5 que formaban el primitivo capital social, cuyo aumento de capital, que debería hallarse representado en acciones, se igual forma que el capital primitivo, se solicitó por los interesados en atención al estado próspero de la sociedad:

Que está continuó sus operaciones con

buen éxito y progresivo crédito de sus efectos hasta mediados de 1855, en que empezó la depreciación de los valores de la empresa a consecuencia de ciertos rumores que empezaron a circular por la plaza, no sin fundamento, según vino mas tarde a demostrarse:

Que a excitación de los individuos de la Junta de gobierno, el Gobernador de Barcelona, cuya intervención oficial se invocaba verbalmente y por escrito, delegó un comisionado, con autorización e instrucciones correspondientes para girar una visita de inspección y enterarse del estado de la Sociedad:

Que los accionistas celebraron una junta general en 10 de noviembre, y acordaron, entre otras cosas: primero, nombrar un gerente-administrador, en sustitución del que antes había desempeñado este cargo y que acababa de desaparecer abandonando a la compañía de una manera sospechosa; segundo, nombrar también una comisión especial encargada de recoger todas las acciones, cuya duplicación resultó en efecto comprobada por igual o mayor número que las primitivas bases de la constitución social, debiéndose entregar, en cambio, a los tenedores láminas provisionales:

Que el comisionado, en cumplimiento del encargo del Gobernador, visitó los libros y establecimientos de la compañía, habiendo encontrado informalidades notables en parte de los referidos libros, y procedido a sellar y empaquetar de 500 en 500 las matrices de las acciones, y dando cuenta detallada de sus operaciones al Gobernador en 5 de enero de 1856:

Que en el día anterior 4 de enero se anunció en los periódicos la convocatoria de una junta general, que debería celebrarse el 8; cuya convocatoria, con tan breve tregua, autorizó el Gobernador a instancia de la Junta de gobierno, que solicitó esta autorización, a pesar de lo dispuesto en el art. 21 de los estatutos, en consideración al estado crítico y anómalo de la empresa, y no sin que se hubiese citado antes otra reunión general que no se llevó a efecto por falta de asistencia:

Que en la del 8 de enero, después de haberse dado cuenta de que la Comisión especial nombrada *ad hoc* en 10 de noviembre, había recogido la casi totalidad de las acciones (6.764), y entregado en cambio las láminas provisionales, se sometieron a deliberación de los accionistas algunos puntos propuestos de acuerdo por la Junta de gobierno y la Comisión especial referida, con objeto de conjurar el inminente peligro de una disolución que amenazaba a la Sociedad:

Que después de una regular discusión se procedió a votar, y fue aprobado uno de los referidos puntos, reducidos a proponer: «que en nada obstante la duplicación o exceso (en el número de acciones) que ha resultado de la recogida, se reconocieran civilmente todas las acciones o títulos presentados hasta el día, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que la Sociedad pueda exigir contra quien haya lugar, siendo de advertir que este extremo resultó aprobado por la mayoría absoluta, o sean todos los asistentes, excepto cinco accionistas:

Que en análoga forma resultaron aprobadas otras propuestas; entre las cuales figuraban:

1.º La de nombrar una nueva comisión especial encargada de proponer las reformas indispensables en razón del estado de la empresa, para su continuación:

2.º La de levantar un empréstito de 150.000 pesos fuertes, que la Sociedad garantizaría como crédito preferente con obligaciones de primera clase:

Que uno de los asistentes expuso por término de la sesión que no debía proceder al reconocimiento civil de todas las acciones, sin distinción entre las legítimas y duplicadas, sino que debían reco-

nocerse bajo la reserva de clasificarlas luego y fijarlas a su valor relativo a la época de su adquisición respectiva, habiéndose acordado sobre este punto no haber lugar a deliberar:

Que el Gobernador de Barcelona, después de haber dado cuenta periódicamente al Gobierno de los sucesos relativos a la empresa, elevó una comunicación en 19 de marzo, acompañando varios antecedentes, y entre ellos el balance de la Sociedad, hecho con intervención del comisionado, una certificación de haberse adherido algunos accionistas ausentes a los acuerdos adoptados por la mayoría en sesión de 8 de enero, los cuales resultaban en suma aprobada por una representación de 5.155 acciones, informando asimismo en sentido favorable a la continuación de la compañía, conforme al propósito de la mayoría de accionistas:

Ultimamente, que mi Gobierno, de conformidad con el dictamen del Tribunal Contencioso, que sustancialmente opinaba en favor de la continuación de la compañía, expidió la Real orden de 21 de mayo autorizando la continuación de la Sociedad con arreglo a las bases acordadas en la Junta de 8 de enero, y previniendo, además de otras medidas, que se convocase una nueva junta general: primero, para proponer las reformas convenientes en los estatutos de la compañía; segundo, para que se ratificasen los acuerdos de 8 de enero, entendiéndose todo sin perjuicio de tercero, y dejando a salvo los derechos de la Sociedad para reclamar los perjuicios de su Director Molas, o de quien procediere, ante los Tribunales ordinarios que conocían ya de la parte criminal de este asunto.

Vista el acta de la sesión del día 4 de julio, celebrada en cumplimiento de la Real orden anterior, de cuya acta resulta, que varios accionistas impugnaron los acuerdos tomados en la de 8 de enero, especialmente el relativo al reconocimiento civil de todas las acciones, protestándose también la nulidad de entrambas reuniones, por haberse celebrado sin ajustarse a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de los estatutos, así en lo referente a los plazos de convocatoria, como en cuanto al número de acciones que deberían poseerse con la antelación de tres meses para tener personalidad en las juntas generales:

Vistas las solicitudes elevadas por algunos accionistas en 11 y 14 de agosto, pidiendo de una parte que se declarasen nulos los acuerdos de las juntas de 8 de enero y 4 de julio, y que se procediese a la reconstitución de la Sociedad bajo las bases que proponían los exponentes, y que reproducen en la demanda; y de otra parte, que no siendo obligatorios los referidos acuerdos para los que, habian protestado y reclamaban de ellos, que se les entregase una acción de las nuevas por cada una de las que poseían y cuya legitimidad se acreditase, debiendo observarse que estas reclamaciones venían representando en la minoría 1.067 acciones:

Vista la comunicación del Gobernador de la provincia de Barcelona de 17 de octubre, remitiendo los estatutos y reglamentos reformados para la continuación de la compañía, cuyo pensamiento apoyaba el Gobernador:

Visto el dictamen de mi Consejo Real de 6 de abril de 1857:

Vista mi Real orden de 9 de julio, expedida de conformidad con el dictamen de mi Consejo de Ministros, por la cual teniendo en cuenta principalmente:

1.º Que los acuerdos de las Juntas de 8 de enero y 4 de julio habían merecido la aprobación de la mayoría de accionistas, representada en último término por 5.155 acciones de las 6.866 que componían la totalidad:

2.º Que ni estos acuerdos, ni la Real orden de 21 de mayo, consentida tácita-

mente, afectaban la libre acción de los Tribunales en la parte criminal, ni los derechos particulares de los accionistas que se estimaren agraviados, se dispuso:

Primero. Declarar cumplida y subsistente la Real orden de 21 de mayo.

Segundo. Mandar que pasasen los antecedentes á mi Consejo Real para que informase sobre los nuevos estatutos de la empresa.

Y tercero. Desestimar las solicitudes de la minoría de accionistas, dejando á salvo sus derechos para que, con arreglo á la ley ó á los estatutos, los ejercitasen como creyeren convenientes.

Vista la comunicación del Juzgado del distrito de San Bertran de Barcelona, á cuyo cargo corren las actuaciones promovidas con motivo de la duplicación criminal de las acciones de la empresa; en cuya comunicación se expresa, que merced al eficaz apoyo de algunos accionistas que se habían mostrado parte en la causa, sería menos embarazosa la clasificación de acciones legítimas y duplicadas en que el juzgado se ocupaba preferentemente:

Vista la demanda presentada por Don Melchor Bruguera y consortes, representados por D. Manuel Casado Tello, y sucesivamente por los licenciados Don Manuel Sas y Llera y D. Juan Francisco Domenech, en que piden principalmente:

1.º Que contra lo resuelto por las Reales órdenes de 9 de julio de 1857 y 21 de mayo de 1856, se declaren nulos los acuerdos de las juntas de 8 de enero y de 4 de julio de 1856, así como lo demás obrado en su consecuencia.

2.º Que para la reconstitución de la empresa, ó bien se adopten las bases propuestas por los demandantes, en minoría, ó en otro caso se declare á los interesados que no se adhieren á los acuerdos repetidos con derecho á que sus acciones sean reconocidas por la totalidad de su valor, sin que vengan obligados á pasar por el reconocimiento civil de la totalidad; y

3.º Que se les reserve el derecho de reclamar toda clase de perjuicios contra quien hubiere lugar.

Visto el escrito de contestación á la demanda presentada por mi Fiscal, con la solicitud de que se confirmen las Reales órdenes de 9 de julio y 21 de mayo, reservando el derecho á los demandantes para que reclamen donde y según corresponda contra los acuerdos de 8 de enero y de 4 de julio en cuanto se crean perjudicados:

Visto el escrito presentado por el licenciado D. Juan Barrié y Agüero, como coadyuvante de la Administración, á nombre de la mayoría de accionistas, pidiendo que se confirmen las Reales órdenes mencionadas, y se declaren obligatorios para todos los socios, sin distinción, los acuerdos de la mayoría en juntas de 8 de enero y 4 de julio, cuya validez combaten los demandantes:

Vistas las secciones segunda y tercera del Código de Comercio, y especialmente los artículos 321 y 325 al 330 inclusive:

Visto asimismo el art. 289:

Vista la ley de Sociedades anónimas de 28 de enero y el reglamento para su ejecución de 17 de febrero de 1848:

Considerando que la naturaleza especial de las Sociedades anónimas con capital fijo determina la necesidad de la intervención administrativa, así para la constitución legal de estas empresas, como para su reorganización ó continuación, siempre que en cualquier concepto hayan de alterarse las bases fundamentales de su primitivo establecimiento:

Considerando que esta intervención tiene por objeto velar asiduamente para que no se comprometan los intereses generales relacionados con las Sociedades anónimas bajo la garantía del Gobierno; que la apreciación de tales circunstancias solo puede hacerse de una manera dis-

crecional, y que por lo mismo las disposiciones gubernativas encaminadas á este fin no pueden sujetarse á reclamación contenciosa, mientras no ofendan derechos preexistentes:

Considerando que en este caso se encuentran las Reales órdenes de 9 de julio y 21 de mayo, en las cuales, si bien se aprueban los acuerdos de la mayoría de accionistas de la Sociedad anónima titulada *Fundición Barcelonesa de Bronces*, porque el Gobierno creyó que esto cedía en provecho del interés colectivo de la Sociedad misma y de los generales relacionados con ella, quedan terminantemente á salvo los derechos particulares de los accionistas que no estuvieron conformes con lo aprobado por la mayoría:

Oído mi Consejo Real, en sesión á que asistieron D. Francisco Martínez de la Rosa, Presidente; D. Domingo Ruiz de la Vega, D. Manuel García Gallardo, Don Juan Felipe Martínez Almagro, D. Saturnino Calderón Collantes, D. Florencio Rodríguez Vaamonde, D. Antonio Caballero, D. Cayetano de Zúñiga y Linares, D. Manuel de Sierra y Moya, D. José Ruiz de Apodaca, D. Antonio Gil y Zárate, D. Francisco Tames Hevia, D. Antonio Navarro de las Casas, D. José Antonio Olañeta, D. Antonio Escudero, Don Diego López Ballesteros, D. Serafín Estévez Calderón, D. Pedro Egaña, Don Fernando Alvarez, D. Manuel Moreno López, D. Fermín Salcedo, D. José Cayeda, D. Modesto Cortazar, el Conde de Clonard y D. Tomás Retortillo:

Vengo en desestimar la demanda intentada por la minoría de accionistas de la Sociedad *Fundición Barcelonesa de Bronces y otros metales* contra mis Reales órdenes de 9 de julio de 1857 y 21 de mayo de 1856.

Dado en Aranjuez á 15 de junio de 1858.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mi el Secretario general del Consejo Real, hallándose celebrando audiencia pública el Consejo pleno, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique á las partes por cédula de Uger, y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 19 de junio de 1858.—Juan Sunyé.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público, Orense 21 de julio de 1858.—El Gobernador, Hermelegildo Guítan.

Número 390.

En la Gaceta de Madrid número 196 correspondiente al 15 del actual se lee lo siguiente:

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO REAL.

Real decreto.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observación y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

En el preito que en primera y única instancia pende en mi Consejo Real, entre partes, de la una D. José de Salamanca demandante, y en su nombre el Licenciado D. Manuel Cortina; y de la otra la Administración general del Estado, demandada y representada por mi Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de la Real orden de 29 de enero de 1857, por la cual se denegó la solicitud del demandante y de los nuevos concesionarios del ferro-carril del Mediterraneo, dirigida á que se

declarase á la parte comprendida desde Madrid á Almansa libre de toda responsabilidad, tanto para con el Gobierno, como para con los tenedores de acciones emitidas con hipoteca de dicho camino:

Visto:

Vistos los antecedentes de los cuales resulta:

Primero. Que en 1815 se otorgó á D. José de Salamanca la construcción de un camino de hierro desde Madrid á Aranjuez, y estando concluido, pasó á ser propiedad del Estado, previa autorización concedida á mi Ministro de Fomento por el Real decreto de 13 de agosto de 1852, fijándose el valor del camino en 60.200.000 reales de su tasación facultativa y disponiéndose que el pago de dicha cantidad se efectuaría por mitad en acciones de carreteras y de ferro-carriles por todo su valor nominal; que se emitirían 20 millones de reales en acciones de caminos y las obligaciones de ferro-carriles necesarias para la adquisición del de Aranjuez; asignando á unas y otras el 6 por 100 de intereses y 1 por 100 de amortización, y garantizándolas con la responsabilidad del Estado, del mismo camino para el capital y de los productos para el interés.

Segundo. Que habiéndose mandado por Real decreto de 19 de diciembre de 1851 proceder á la construcción por cuenta del Estado de otro ferro-carril desde Aranjuez á Almansa, D. José de Salamanca en 4 de diciembre de 1852 contrató con el mismo Gobierno dicha construcción extipulándose que por ella se le habían de abonar en acciones de ferro-carriles 230 millones de reales, con el refido interés de 6 por 100 y 1 por 100 de amortización; y que al capital é intereses quedarían hipotecados el camino con el material de su explotación y los productos del propio camino hasta donde alcanzasen las subvenciones de las provincias, y al resto la parte necesaria de lo consignado al efecto en el presupuesto del Estado.

Tercero. Que por la ley de las Cortes Constituyentes de 9 de marzo de 1855 se decretó que se recogieran las acciones de carreteras y ferro-carriles creadas para el pago de las obras ó subsidios de los caminos de hierro en virtud de varios reales decretos en ella mencionados, entre los cuales aparecen el de 19 de diciembre de 1851 contratando la construcción del de Aranjuez á Almansa, y el de 13 de agosto de 1852 comprando el de Madrid á Aranjuez; y se mandó que se dieran á los tenedores de las expresadas acciones otras de igual valor y con las mismas garantías en que se expresase la autorización de las Cortes para crearlas.

Cuarto. Que por otra ley de la misma fecha se autorizó á mi Gobierno para otorgar á D. José de Salamanca la concesión del ferro-carril de Madrid á Aranjuez y Almansa bajo las estipulaciones contenidas en el pliego adjunto á la misma ley; siendo la segunda que D. José de Salamanca se obligaba á entregar en pago de la concesión de la parte comprendida desde Madrid á Aranjuez la cantidad de 60.200.000 rs., en que fué adquirido por mi Gobierno; por la tercera se rescindía el contrato de construcción de la parte del camino entre Aranjuez y Almansa, devolviendo Salamanca los 111.500.000 reales que como contratista de ella había recibido en acciones de ferro-carriles; y disponiéndose en la cuarta que el pago de los 171.700.000 reales que había de devolver Salamanca se efectuaría en acciones de ferro-carriles ó de carreteras exclusivamente, computándose estas como equivalentes á las primeras, en siete anualidades iguales.

Quinto. Que verificado el pago antes del vencimiento de los plazos estipulados y dueño ya D. José de Salamanca de la expresada línea, trató de su enajenación con el Conde de Moray, B. A. Chatelus, Gustavo de la Haute, Conde de Lehon, y la casa de Rostchild, hermanos; quienes en unión con Salamanca acudieron en 16 de junio de 1856 al Ministerio de Hacienda

exponiendo que autorizaba el concesionario por mi Gobierno para transferir su concesión, y convenido con varios capitalistas en la forma y manera de efectuarla, surgía una dificultad que reclamaba una urgente decisión aclaratoria, y solicitando en su consecuencia que en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de concesión de 9 de marzo de 1855, se declarase que hecho el pago por D. José de Salamanca en los valores que determinaba la referida ley, quedaba el camino de hierro de Madrid á Almansa libre de toda responsabilidad, tanto para con el Gobierno, como los tenedores de acciones emitidas anteriormente á la venta hecha á Salamanca; y mi Gobierno en la precisa obligación de responder por sí á los tenedores de aquellas acciones, y garantizar á los dueños del camino contra cualquier perjuicio y reclamación que pudiera haber por parte de los indicados accionistas.

Y sexto. Que remitida dicha exposición al Ministerio de Fomento, y oído el parecer de su Abogado consultor y de la Dirección general de la Renta pública, tuve á bien resolver por mi Real orden de 29 de enero de 1857 que no había lugar á acceder á dicha solicitud; y que si Salamanca había transferido el camino como libre de toda carga, contra él debían dirigir los nuevos concesionarios las reclamaciones que creyeran convenientes.

Vista la demanda que contra la precedente Real resolución ha propuesto ante mi Consejo Real el Licenciado D. Manuel Cortina, á nombre de D. José de Salamanca, pretendiendo que se declare sin efecto dicha Real orden; y que mi Gobierno, como vendedor del camino de hierro de Madrid á Aranjuez y de lo construido desde este punto á Almansa, se halla en la obligación de cancelar los gravámenes á que el uno y lo otro se encuentran afectos y especial y señaladamente la hipoteca constituida para la seguridad de las acciones que se emitieron para su pago, ó de sanear cumplidamente en su defecto á su representado ó los que de él traigan causa:

Visto el escrito de contestación de mi Fiscal, en que pide se desestime la demanda, sin perjuicio de los derechos que tenga y á su tiempo pueda ejercitar Don José de Salamanca para el saneamiento de los gravámenes que por cualquier concepto y con anterioridad á la venta tuviese el camino vendido:

Considerando que no habiéndose obligado mi Gobierno, al otorgar á D. José de Salamanca la concesión del camino de hierro de Madrid á Almansa, á cancelar la hipoteca impuesta sobre dicho camino, lo admitió tácitamente con este gravamen Don José de Salamanca, puesto que de él tenía conocimiento:

Considerando que la acción propuesta por el demandante con objeto de liberrar de la referida hipoteca el ferro-carril de Madrid á Almansa solo sería procedente en el caso de haberse estipulado expresamente, ó en el de ignorar D. José de Salamanca que sobre el ferro-carril existía la hipoteca; y resulta que no hubo tal pacto, y que conocía D. José de Salamanca las obligaciones á que el ferro-carril y sus productos eran responsables:

Considerando que si bien le compete la acción para el saneamiento, esta no puede ejercitarse hasta que sean turbados en el aprovechamiento del citado ferro-carril sus propietarios;

Oído mi Consejo Real, en sesión á que asistieron D. Francisco Martínez de la Rosa, Presidente; D. Domingo Ruiz de la Vega, D. Manuel García Gallardo, Don Juan Felipe Martínez Almagro, D. Florencio Rodríguez Vaamonde, D. Antonio Caballero, D. Cayetano de Zúñiga y Linares; D. Manuel de Sierra y Moya, Don José Ruiz de Apodaca, D. Antonio Gil y Zárate, D. Francisco Tames Hevia, Don Antonio Navarro de las Casas, D. José María Trillo, D. José Antonio Olañeta, Don Antonio Escudero, D. Pedro Egaña, Don Manuel Moreno López, D. Fermín

Salcedo, D. Modesto Cortazar, el Conde de Glenard y D. Tomas Retortillo; Vengo en declarar que no procede la cancelacion de la hipoteca impuesta sobre el ferro-carril de Madrid a Almansa á favor de los tenedores de las acciones de ferro-carriles, sin perjuicio del saneamiento en su caso y lugar, con arreglo á derecho; confirmando en este sentido la Real orden de 29 de enero de 1857.

Dado en Palacio á 30 de junio de 1858. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de la Gobernacion, José de Posada Herrera.

Publicacion. — Lefdo y publicado el anterior Real decreto por mí el Secretario general del Consejo Real, hallandose celebrando audiencia pública el Consejo pleno, acordó que se tenga como resolucion final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique á las partes por cédula de Uger, y se inserte en la Gaceta, de que certifico.

Madrid 8 de julio de 1858. — Juan Suñé.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense julio 21 de 1858. — El Gobernador, Hermenegildo Guitian.

BANCO AGRÍCOLA DE BENEFICENCIA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

La Junta del mismo, en sesion celebrada en 16 del actual, acordó conceder los prestamos siguientes:

Rs. vn.

PARTIDO DE ALLARIZ.

Ayuntamiento de Esgos.

Maria Perez, de Villar de Orelles. 500
Josefa Fernandez, de id. id. 200

PARTIDO DEL CARBALLINO.

Ayuntamiento de Boborás.

Luis Sotelo, de S. Miguel de Albarillos. 500
Josefa Pinal, de Sta. Maria de Jubencos. 500

Ayuntamiento de Cea.

José Alvarez Pulido, de Cea. 500

PARTIDO DE CELANOVA.

Ayuntamiento de Cortegada.

Gregorio Gil, de S. Verisimo de Refojos. 250

Ayuntamiento de Gomezende.

Carmela Gonzalez viuda, de Gomezende. 500
Ramon Lorenzo, de S. Lorenzo de Fustanes. 200
Manuel Yañez, de Sta. Maria do Pao. 500

PARTIDO DE GINZO.

Ayuntamiento de Rairiz de Veiga.

José Morgade Valente, de Congostro. 500
Francisco Fernandez Penilla, de idem. 500

Ayuntamiento de Sarreaus.

Francisco Rua, de Sta. Maria de Lodoselo. 500
José Vidal, de Sarreaus. 500

PARTIDO DE ORENSE.

Ayuntamiento de Orense.

Gregorio Rodriguez, de Orense. 500
Miguel Garcia, de id. 500
Antonio Gonzalez, de Velle. 100
José Placer, de Rairo. 500
Pascua Perez, de Sejalvo. 100
Manuela Cao, de Reza. 500

Ayuntamiento de la Peroja.

Vicente Lopez, de S. Julian de Celaguanes. 200
Froilan Sárria, de Gual. 200
Antonio Sompayo, de S. Salvador de Armental. 200
José Moure, de id. 200

Ayuntamiento de San Ciprian.

Francisco Calvino, de S. Ciprian. 500
José Diaz, de id. 500
Benito Rodriguez, de Sotopenedo. 500

Ayuntamiento de Toén.

Francisco Mendez, de S. Mamed de Puga. 500
Manuel Blanco, de id. 200
Domingo Mozo, de S. Martin de Alongos. 100

Ayuntamiento de Villamarín.

Andres Dominguez, de S. Vicente de Reádegos. 500
Blas Rodriguez, de S. Salvador de Rio. 200

PARTIDO DE RIBADAVIA.

Ayuntamiento de Eiro.

Juan Pajarin, de Sta. Marina de Gomariz. 500

PARTIDO DE TRIVES.

Ayuntamiento de idem.

Ramon Perez Crespo, de la Puebla. 400
Manuel Vasalo, de Santa Maria de Caba. 400

Ayuntamiento de Rio.

Manuel Gonzalez Losada, de Cabanas. 500
Pablo Perez, de S. Juan de Rio. 200
D. Javier Lopez, de id. 200

TOTAL. 9,650

Y se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público y de los interesados. Orense julio 20 de 1858. — El G. P. — Hermenegildo Guitian. — Rafael Gomez Gil, Secretario.

ADMINISTRACION PRINCIPAL

DE RENTAS ESTANCADAS DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

De los datos que existen en esta Administracion principal recibidos de los Administradores subalternos de los partidos, consta que los pueblos de esta provincia que á continuacion se expresan, no se surten de sal de los Alfolies de la misma, sino en escasisima cantidad y contados verinos; y por lo tanto siendo un indicio seguro de que sus habitantes lo hacen de la sal portuguesa de contrabando ó se dedican á ejercer este, he acordado publicarlo por medio de este periódico oficial para que llegando á conocimiento de cuantos se hallan en disposicion y deber de perseguir el fraude tengan mas facilidad en dirigir con acierto sus disposiciones y pesquisas.

Pueblos que se citan.

Todos los de los Ayuntamientos de
Cortegada. Verca.
Arnoya. Gomezende.

Bande. Puente de Ibañeta.
Cartello. Quintela.
Entrimo. Villamea.
Lovera. Freás de Eiras.
Lovios. Acebedo.
Muñinos.

Y los pueblos de

Canade, San Bartolomé.
Gorgolosa.
Cima de Ribera.
Mosteiro de Ribera.
Guntimil.
Parada de Ribera.
Damil.
Laroá, San Pedro.
Laroá, Santa Maria.
Fiestras.
Rebordechá.
Paredes.
Moreiras de Limia.
Paramontaos.
Seoane.
Nocedo de Ribeira.
Cobelas y sus barrios.
Fuente-Arcada.
Aguis.
Loureses.
Pejeiros.
Pena-Longa.
Guntin.
Pejeiros.
Cobas.
Calbos de Randin.
Castelaus.
Feas y San Miguel.
Gelpellas.
Lobás.
Rioseco.
Randin.
Vila.
Abad, San Payo y sus barrios.
Baltar.
Boullosa y sus barrios.
Gomariz.
Garabelos y Bouzo.
Niñodagaia.
Tejones.
Tosende.
Gudin.
Paradela, S. Juan y sus barrios.
Sabucedo, San Salvador é idem.
Sobreganade, San Mamed.
Porquera, San Lorenzo.
Porquera, San Martin.
Porquera, Santa Maria.
Chamusinos, Santa Eulalia.
Escornabois.
Lobaces.
Rabal.
Trasmiras.
Villaseca.
Villar de Liebres.
Villar de Rey.
Parada de Outeiro.
Villar de Santos.
Granja.
Soutelino da Raya.
Casas dos Montes.
Filariz.
Medeiros.
Flor de Rey.
Souto-Cobo.
Lamas-Veite.
Castro de Abajo.
Idem de Arriba.
Sompayo.
Mourisca.
Rairiz de Veiga.
Candás.
Congostro.

Guillamil.
Lampaza.
Ordes.
Sabariz.
Zapeaus.
Freijo, Santiago.
Lodoselo, Santa Maria.
Nocelo da Pena.
Perrelos.
Toomonte.
Vega das Meas.
Villardebós.
Villar de Ciervos.
Vega del Seijo.
Soutochao.
Enjames.
Arzádegos.
Barja.
Terroso.
Rojosende.
Arzoa.
Rabal.
Rosal.
Tamagos.
Tamaguelos.
Oimbra.
Mourazos.
Mandin.
Lama de Arcos.
Villaza.
Villar de Ciervos.
Moimenta.
Feces de Abajo.
Berrande.
Trave.
Desteiro.
Condado.
Macendo.
Lamalonga.
Curra.
Meijid.
Villanueva.
Manzallbos.
Cadabos.
Santigoso.
Feces de Arriba.
San Ciprian.
Villarello de Cota.
Cabreiroá.
Gironda.
San Cristóbal.
San Millan.
Magdalena.
Vidiferri.
Espino.
Bousés.
Cambido.
Chaguazoso.
Pereiro.
Esculqueira.
Pentes.
San Lorenzo.
Barja.
Villanueva.
Pias.
Barjacoba.
Mezquita.
Villavieja.
Tameiron.

Orense 18 de julio de 1858. — Carlos Taboada y Rada.

En la extraccion de la loteria primitiva verificada en Madrid el dia 19 del actual, han sido premiados los números siguientes:

73=51=66=20=81.

IMPRENTA DE D. CESÁREO PAZ Y H.